

**Reunión de Ministros de Finanzas**  
**Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19**  
**y Después**

**8 de septiembre de 2020 - 8.00 a 13.00 horas**

El 8 de septiembre de 2020, la Vicesecretaria General, la Viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas del Canadá y el Ministro de Finanzas y Función Pública de Jamaica convocaron a cerca de 40 ministros y viceministros de finanzas y 12 organizaciones internacionales, así como a asociados institucionales, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil y altos funcionarios, a una reunión telemática de alto nivel de ministros de finanzas. Moderó la reunión la experiodista de la BBC Nisha Pillai. El evento marcó un hito tras meses de trabajo después de que en la reunión de alto nivel celebrada el 28 de mayo, que convocaron el Secretario General y los Primeros Ministros del Canadá y Jamaica, se presentara la iniciativa Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y Después.

El objetivo de la Reunión Ministerial era permitir a los ministros de finanzas debatir y comentar un conjunto de planteamientos de política para encontrar soluciones centradas en las personas a las consecuencias económicas mundiales de la crisis de la COVID-19 y sentar las bases de un futuro sostenible, resiliente y con perspectiva de género. El conjunto de planteamientos de política fue la culminación de la labor de seis grupos de debate sobre los siguientes temas interrelacionados: la financiación exterior, las remesas, el empleo y el crecimiento inclusivo; una mejor recuperación en pos de la sostenibilidad; la liquidez y la estabilidad financiera a nivel mundial; la vulnerabilidad de la deuda; la colaboración con los acreedores del sector privado; y los flujos financieros ilícitos.

La Vicesecretaria General, Amina Mohammed, afirmó en su discurso de apertura que el mundo aún no había dado muestras de la unidad y la solidaridad que requería una respuesta mundial sin parangón en la historia reciente, y la Excm. Sra. Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas del Canadá, declaró que en el actual mundo interconectado de la globalización, el sistema de salud mundial y la capacidad de lograr una recuperación económica sostenible dependían de la fuerza de todos. Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), empezó señalando algunos signos de recuperación económica en las economías avanzadas, pero advirtió de que era necesario mantener el apoyo hasta que se pudiera dar un giro a la economía en beneficio de la comunidad mundial. Añadió que se preveía una recuperación solo parcial y desigual.

Haciéndose eco de los llamamientos en pro de una respuesta mundial coordinada a la crisis, el Excmo. Sr. Nigel Clarke, Ministro de Finanzas y Función Pública de Jamaica, instó a que se adoptaran medidas específicas para ayudar a los países en desarrollo. Tras subrayar que los países desarrollados eran los más afectados, señaló que el epicentro de la pandemia ya se había trasladado al mundo en desarrollo, donde vivía más del 80 % de la población mundial, pero donde el margen de maniobra fiscal seguía siendo limitado.

Con esas observaciones iniciales se abrió el debate. Los participantes destacaron que, aunque había sido la catalizadora de esta reunión, la COVID-19 había dejado al descubierto vulnerabilidades endémicas en el sistema económico mundial y había afectado de manera desproporcionada a los países y grupos vulnerables. A causa de la pandemia, se calculaba que ese año el crecimiento mundial caería un 4,9 %; el comercio mundial de mercancías, un 18,5 %; y las remesas mundiales y la inversión extranjera directa, un 20 % y un 40 % respectivamente. Mientras tanto, la deuda mundial había alcanzado el máximo de 258 billones de dólares en el primer trimestre

de 2020. Como dijo el Enviado Especial sobre la Financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a consecuencia de la crisis de la COVID-19, casi todos los indicadores en los que se esperaban subidas habían bajado y todos los indicadores en los que se esperaban bajadas habían subido.

Además, aunque a nivel mundial se habían gastado 11 billones de dólares de los Estados Unidos en la respuesta fiscal a la crisis, el 88 % de esa suma había sido desembolsada por países de alto ingreso e invertida en ellos mismos, y menos del 2 % había sido desembolsado por los países menos adelantados, lo que mostraba que se distaba de contar con la solidaridad necesaria para dar una respuesta general mundial.

Los grupos vulnerables del mundo en desarrollo han sufrido de manera desproporcionada los efectos de la crisis en la economía real. La pobreza se había ido reduciendo a ritmo constante, pero se preveía que la pandemia devolvería a la pobreza extrema a entre 70 y 100 millones de personas, el primer retroceso de este tipo desde 1998. Entretanto, a fines de 2020 otros 265 millones de personas podrían padecer o haber padecido una grave penuria de alimentos. Se calculaba que en el segundo trimestre de 2020 se habían perdido 400 millones de empleos, lo que agravaba unas condiciones de trabajo de por sí precarias y unas tasas de informalidad ya elevadas en el mundo en desarrollo.

Los participantes destacaron que, para poner coto a esas tendencias, urgía aportar soluciones firmes en materia de liquidez, deuda y colaboración de los acreedores del sector privado a nivel mundial. Subrayando que la pandemia amenazaba con abocar al mundo a otra gran recesión, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos pidió un Plan Marshall a gran escala para proporcionar la liquidez necesaria a las economías en desarrollo, y Ghana pidió que el mundo aunase y coordinase esfuerzos para poder mitigar el desastre que se produciría el año siguiente cuando los países empezaran a quebrar.

Varios países, entre ellos Francia, el Japón, el Pakistán, el Senegal, China, Rwanda, Etiopía, la Arabia Saudita, Alemania y Noruega, se sumaron al llamamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial a que se extendiera la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda a los 73 países más pobres. Alemania y los Países Bajos, sin embargo, subrayaron que la extensión de la Iniciativa debía servir para afrontar problemas de liquidez, no de solvencia, y abogaron por que se estudiara caso por caso la situación de los países con problemas de solvencia. Varios participantes instaron a que la Iniciativa incorporara a países de ingreso mediano vulnerables y a pequeños Estados insulares en desarrollo que en ese momento no cumplían los criterios de admisibilidad. La Unión Africana, el Senegal, Nigeria y Gambia afirmaron que determinados países necesitarían una cancelación total de la deuda, en tanto que el FMI y Oxfam pidieron una mayor reestructuración y más análisis de sostenibilidad de la deuda y Oxfam propuso crear un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana.

El FMI, China, la Unión Europea, Francia, los Países Bajos, el Pakistán, España, el Banco Mundial y los Estados Unidos propugnaron una mayor participación del sector privado en las iniciativas de alivio de la deuda, y Estados Unidos instó a los países en desarrollo con acceso a los mercados a que pidieran préstamos al sector privado. El Senegal, sin embargo, subrayó que la participación del sector privado en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda no convenía a todos y debía examinarse de manera más individualizada. El Pakistán, China y varios países más pidieron que los bancos multilaterales de desarrollo se sumaran a la Iniciativa. El Pakistán subrayó que participar en ella no debería afectar a la calificación crediticia de los países, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso crear una agencia de calificación crediticia pública e independiente. Varios participantes, entre ellos el FMI, el Banco Mundial y los Estados Unidos de América,

también instaron a una mayor transparencia en lo tocante a la deuda. Países desarrollados y en desarrollo, entre ellos Ghana, el Pakistán, China, Rwanda, Italia, el Senegal y Nigeria, así como la CEPAL y la Corte Penal Internacional, pidieron que se emitieran nuevos derechos especiales de giro y se reasignaran los aproximadamente 176.000 millones de dólares en derechos especiales de giro no utilizados en manos de países desarrollados. El FMI reiteró que ya estaba ampliando la utilización de los existentes y traspasándolos a economías en desarrollo en condiciones favorables.

Varios participantes propusieron crear nuevos fondos y servicios para proporcionar financiación específica a los países vulnerables. Costa Rica pidió que se creara el Fund Against COVID-19 Economics (FACE) para proporcionar financiación a las economías en desarrollo mediante inversiones y créditos en condiciones favorables de bancos multilaterales de desarrollo, y la Comisión Económica para África recomendó que se creara un Servicio de Liquidez y Sostenibilidad para reducir los tipos de interés que deben pagar los países en desarrollo. La CEPAL pidió que se creara el Fondo de Resiliencia del Caribe para asociar el alivio de la deuda a la resiliencia a las condiciones económicas y climáticas, y Maldivas pidió que se creara un fondo fiduciario mundial para ayudar a los Estados dependientes del turismo. España propuso crear un fondo mundial para fomentar la inversión pública y privada en el plano local enmarcado en el Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La necesidad de recapitalizar los bancos multilaterales de desarrollo locales, nacionales y regionales también se evocó a lo largo del debate, y el Club Internacional de Instituciones Financieras para el Desarrollo instó a los participantes a que asistieran y contribuyeran a la Cumbre de Financiación en Común —primera reunión mundial de bancos públicos de desarrollo— que se celebraría en París en noviembre de 2020.

Abordando la relación del sector financiero con la economía real, se examinaron planteamientos de política sobre financiación externa, remesas, empleo y crecimiento inclusivo. Varios participantes, entre ellos Rwanda, Fiji, Indonesia, Sri Lanka y la Unión Europea, observando las interconexiones entre la salud y todos los aspectos de la Agenda 2030, apoyaron el llamamiento de la Vicesecretaria General a buscar una vacuna contra la pandemia de COVID-19 que se distribuyera de manera equitativa y generalizada. El Reino Unido también subrayó la importancia de implantar sistemas de salud sólidos y resilientes sustentados en la cobertura sanitaria universal.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, entre otros, recalcó que la financiación pública debía asignarse más eficazmente para ayudar a los grupos vulnerables. Algunos participantes, como Egipto y la CEPAL, pidieron que se hiciera un mayor uso de las inversiones de la diáspora para complementar los ingresos perdidos por el descenso de las remesas y para reducir los costos de transacción de las remesas. Tras poner de relieve las altas tasas de informalidad de las economías en desarrollo y emergentes, Egipto propuso hacer transferencias de efectivo para fines de socorro de emergencia, aplicar planes de garantía del empleo y reducir la elevada carga fiscal sobre el trabajo formal; España, Dinamarca y la Unión Europea se mostraron partidarios de aumentar la protección social y el trabajo decente, y España respaldó medidas de fomento del trabajo decente, como la iniciativa de generalización del trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo. La Confederación Sindical Internacional también pidió que se creara un fondo de protección mundial para los más vulnerables a fin de facilitar la concertación de un nuevo contrato social en el futuro. Varios países, entre ellos Bangladesh, China y Gambia, pidieron a los países que cumplieran el objetivo de

destinar el 0,7 % de su producto interno bruto a asistencia oficial para el desarrollo, conforme a lo dispuesto en la Agenda de Acción de Addis Abeba.

Teniendo presente que el aumento de la digitalización era inexorable en el futuro, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que ese proceso permitiría crear algoritmos para aprobar préstamos, reforzar la protección social y reducir los costos de transacción de las remesas a fin de contribuir a reducir la brecha de desigualdad que la COVID-19 había puesto de manifiesto. Los Emiratos Árabes Unidos observaron que la digitalización podía mejorar la inclusión financiera y facilitar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, pero había que gestionarla adecuadamente para contrarrestar los riesgos.

La sostenibilidad y la necesidad de ajustar las políticas de recuperación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París en aras de un futuro más resiliente, inclusivo y sostenible fueron temas transversales de todos los grupos y marcos temporales. El Pakistán, la Comisión de la Unión Africana y la CEPAL respaldaron los canjes de deuda por medidas de consecución de los ODS y los objetivos climáticos para dar un respiro a los países vulnerables, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo. El Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca, Italia, la Unión Europea, Côte d'Ivoire y otros países sostuvieron que era preciso ajustar las iniciativas privadas y públicas de inversión, así como el gasto público, a los ODS y al Acuerdo de París, e incorporar los riesgos climáticos en las declaraciones de riesgos financieros. También exhortaron a los Gobiernos a que actualizaran los planes nacionales con arreglo a los objetivos de sostenibilidad, en particular las contribuciones determinadas a nivel nacional, las estrategias de reducción del riesgo de desastres y los marcos nacionales de financiación integrados. España pidió que se elaboraran presupuestos acordes con los ODS a fin de avanzar en la consecución de la Agenda 2030 y dar coherencia a las políticas públicas, indicando que se trataba de una iniciativa que ya se estaba aplicando en España.

Egipto y la Unión Europea apoyaron el uso de bonos verdes para contribuir a mantener los beneficios ambientales generados por la COVID-19 y reorganizar las economías en el futuro. El Banco Mundial señaló que se habían incrementado en un 50 % los recursos de la Asociación Internacional de Fomento y que ese mismo año se ampliarían a unos 70.000 millones para contribuir a reducir la pobreza, desarrollar el capital humano y luchar contra la amenaza que plantea el cambio climático a largo plazo. El FMI añadió que era necesario tener en cuenta y afrontar adecuadamente crisis venideras como la crisis climática y evitar que la desigualdad (incluida la desigualdad de género) y la pobreza volvieran a enseñar los dientes.

Aunque se consideraba desde hacía mucho tiempo que los flujos financieros ilícitos eran un problema mundial, la necesidad apremiante de liquidez en las circunstancias actuales las había puesto en el centro de atención. Para liberar recursos sumamente necesarios, varios grupos propusieron crear un mecanismo de acción rápida para la transparencia que priorizara las medidas contra la corrupción y el blanqueo de dinero. Por lo que respecta a la labor de digitalización del PNUD, varios participantes, entre ellos Nigeria, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y Oxfam, subrayaron la importancia de utilizar tecnologías digitales para reforzar el intercambio automático de información fiscal, impulsar los sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero de acuerdo con las normas del GAFI, mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Nigeria exhortó a los países destinatarios de flujos financieros ilícitos a contribuir de lleno a combatirlos y a devolver los activos robados, y Oxfam pidió a las Naciones Unidas que organizara una convención fiscal mundial.

Para concluir, el Ministro de Finanzas de Jamaica, Excmo. Sr. Nigel Clarke, expresó la esperanza de que la voluntad y el impulso políticos contribuyeran a poner

en práctica las medidas examinadas en la reunión. También señaló que las mujeres se habían visto desproporcionadamente afectadas por la crisis de COVID-19 e instó a los interesados a que incorporaran un elemento de género en los planes de respuesta. El Embajador del Canadá ante las Naciones Unidas, Excmo. Sr. Bob Rae, hablando en nombre de la Ministra de Finanzas del Canadá, Excma. Sra. Chrystia Freeland, subrayó que la pandemia no era niveladora, sino reveladora, y podría llegar a extremar las desigualdades sistémicas a menos que se actuara con urgencia para evitarlo.

Por último, la Vicesecretaria General agradeció el renovado sentimiento de urgencia que permitiría presentar a los Jefes de Estado y de Gobierno, el 29 de septiembre, un conjunto de planteamientos de política tan ambiciosos como realistas. Tomó nota de que las políticas debían dar un respiro a los países vulnerables garantizando la disponibilidad de recursos y señaló que hacían falta propuestas audaces, como el ingreso básico universal y la cobertura sanitaria universal, para allanar el camino hacia un futuro de mayor resiliencia. Por último, instó a los participantes a que salieran de esta crisis como un frente unido, ya que ninguna vacuna podría resolver de forma rápida y sencilla la crisis socioeconómica por la que estaba pasando la humanidad.